



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA N°17165/2015

*Sentencia Definitiva*

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los \_\_\_\_\_, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos **LA ZULEMITA S.A. c/ FISCO NACIONAL - AFIP s/IMPUGNACION DE DEUDA**, se procede a votar en el siguiente orden:

**EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:**

Llegan las actuaciones a esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la Resolución N° 26583/13 (Dv JASS) que no hizo lugar a la impugnación solicitada.

Ante el relevamiento, la demandada impone una multa por los períodos 01/2009 a 07/2012, por haber detectado diferencias de contribuciones patronales de la Seguridad Social por aplicación del art. 2° inc. a) del Decreto 814/2001, Decreto 1009/01 y Resolución General 1095/01.

La deuda actualizada es de 1.268.194,85.

La demandada, ante la declaración de imposibilidad de pago de la accionante, abre a prueba las actuaciones y la División Fiscalizaciones especiales concluye que resulta excesivo el índice de endeudamiento total, lo cual produciría la falta de capacidad de pago del contribuyente para afrontar obligaciones a mediano y largo plazo y no contaría con la disponibilidad para afrontar el depósito necesario objeto de reclamo (fs. 132/134) la que fue ratificada mediante la Providencia N° 6/15 (DI CRSS) (fs. 144/147).

En su apelación, la accionante afirma que AFIP pretende imponerle para el promedio de ventas anuales el límite de \$48.000.000 que establece el decreto 1009/01, porque la ley 24.467 no definiría lo que es una PyMEs. Sostiene el quejoso, que la empresa debió pagar y así lo hizo, alícuota reducida del 17% por encuadrarse en la ley 24.467.

Asimismo manifiesta que el tope de facturación que correspondería tener en cuenta durante el periodo objeto de determinación debe ser actualizado. Que el decreto 1009/01 tuvo sólo como objeto definir los sujetos que resultan comprendidos en cada uno de los incisos del Decreto 814/01, a fin de establecer la alícuota que debían pagar según fueran considerados PyMEs o no.

Alega que mediante las resoluciones 24/01, 675/02,147/06 y 21/10, se actualizaron los montos tenidos en cuenta para determinar el encuadre en micro, pequeñas y medianas empresas y, por consiguiente, si resultan alcanzados por los beneficios de las leyes 24.467 y 25.300. Destaca que la empresa, en el periodo en análisis, no superó el tope de facturación fijado por dichas disposiciones lo que hace indiscutible su encuadre en la alícuota reducida del decreto 814/01.

La AFIP, por su parte sostiene que atento que la contribuyente ha superado el importe máximo de \$ 48.000.000 de ventas anuales según lo establecido por el Decreto N° 1009/1 y la Resolución General (AFIP) n° 1095/01, a la misma le corresponde tributar la alícuota establecida en el inciso a) del primer párrafo del art. 2 del Decreto PEN 814/01.

Ahora bien, el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos, no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de las Resoluciones 24/01, 675/02,147/06 y 21/10 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.



Siendo que el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME, pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por la Resolución 24/01, 675/02, 147/06 y 21/10 y mod., especialmente la Resolución 147/2006 y 21/10, para el periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2).

En atención al modo como se resuelvo propicio imponer las costas al organismo (art. 68 y cc. CPCCN).

Por lo expuesto, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en su conjunto en la suma de \$20.000 (art. 13 de la ley 24.432), suma a la que se adicionará el IVA en caso de corresponder.

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

No puedo compartir el criterio de mi distinguido colega.

En autos se impugna la resolución 2658/2013 que determinó una deuda de \$ 496.583,19 en concepto de capital y \$ 273.218,06 por intereses resarcitorios correspondientes a los periodos enero 2009 a julio 2012 También se reclama multas por infracciones cometidas antes del 01/03/2010 por un total de \$ 68.141,85 y posteriores a esa fecha, por \$ 264.120,20. Lo reclamado es por diferencias en las contribuciones al SUSS al entender que se efectuó un incorrecto encuadramiento del artículo 2° del Decreto 814/2001 por el periodo fiscal enero 2009 a julio de 2012.

Tras analizar la documentación acompañada y atento la normativa vigente, el organismo entendió que la encartada quedó encuadrada en el inciso a) del primer párrafo del artículo 2° del Decreto 814/01 por los periodos 01/01/2009 a 07/2012 en tanto sus ventas totales anuales superan los cuarenta y ocho millones de pesos, en el marco delo previsto en la Resolución N° 24/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. dado que La Zulemita superaba el máximo de \$ 48.000.000 de ventas totales anuales según lo establecido por el decreto 1009/2001 y la Resolución General de AFIP N° 1095/2001 (ver fs. 77 y siguientes).

Con respecto a la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820 el propio organismo entendió que el reclamo efectuado excede la capacidad contributiva del impugnante motivo por el cual ordena se eleven estas actuaciones a la Cámara.

Planteada así la cuestión y atento lo elevado de la suma reclamada, entiendo prudente proceder a la apertura de la presente instancia judicial.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento habré de propiciar la confirmación de la resolución recurrida.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Ello pues sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17..

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo –Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada)

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

Ahora bien, en cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467, es decir las pequeñas y medianas empresas y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

La definición de pequeña y mediana empresa es, como ya he anticipado, mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha definición, pero exclusivamente a los fines laborales (art. 83de la ley 24.467) y no fiscales



y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25.414 que es una ley de emergencia pública.

Por lo expuesto propongo. 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas por su orden atento existir jurisprudencia contradictoria en la materia lo que pudo determinar que el impugnante se sienta asistido por mejor derecho (art. 68 “in fine” CPCCN).

**EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:**

Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Dorado.

A mérito de lo que resulta del voto de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas por su orden atento existir jurisprudencia contradictoria en la materia lo que pudo determinar que el impugnante se sienta asistido por mejor derecho (art. 68 “in fine” CPCCN).

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

La vocalía N°3 se encuentra vacante (art. 109 del RJN)

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

LUIS RENÉ HERRERO  
Juez de Cámara

MARTIN LACLAU  
Juez de Cámara

ANTE MÍ:  
AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

NDA

